

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 26 DE SETEMBRE DE 2011, SOL·LICITADA PEL GRUP SOCIALISTA. ESBORRANY DE L'ACTA.

SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ

PRESIDENT: Vicente Dubal Bon

Grup Popular

José Luis Ortiz Linares
José Luis Pont Zamora
María Ángeles Wis López
María Teresa Olmo Cano
Javier Ferrandis San Cirilo

Grup Socialista

Josep Lluís de la Piedad i Perez
Guillermo Jorques Lladosa
Francisco Moratal Ferrandis
Josefina Calabuig Biosca
María José Mollá Andrés

SECRETARI: Eduardo Estellés Chapa

A la Casa Consistorial de la Vila de Moixent, i hora de les 19'40 del dia 26 de setembre de dos mil onze, es reuniren els Srs. membres de l'Excm. Ajuntament abans relacionats, sota la Presidència del Sr. alcalde-president, amb l'assistència del Sr. secretari de la Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. president, començà el tractament dels assumptes especificats a l'Ordre del Dia de la sessió, prèviament remés als integrants de la Corporació Local, el qual es transcriu tot seguit:

ORDRE DEL DIA

1r.- Anàlisi i estudi dels recursos de reposició presentats incloent les parcel·les de l'ajuntament del sector industrial 7A del polígon industrial Jaume I.

2n.- Acord estimatori dels recursos de reposició presentats pels propietaris de les parcel·les del polígon industrial Jaume I.

3r.- Desestimació per acord plenari del compte de liquidació definitiva del polígon industrial Jaume I.

/-----/

1r.- Anàlisi i estudi dels recursos de reposició presentats incloent les parcel·les de l'ajuntament del sector industrial 7A del polígon industrial Jaume I.

2n.- Acord estimatori dels recursos de reposició presentats pels propietaris de les parcel·les del polígon industrial Jaume I.

3r.- Desestimació per acord plenari del compte de liquidació definitiva del polígon industrial Jaume I.

Es posa damunt de la Mesa l'informe emès per l'advocat Luis Ignacio Serra Mallol, amb número de col·legiació 7530, contractat per l'Ajuntament mitjançant Resolució de l'Alcaldia núm.: 388, de 21 de setembre de 2011. L'informe es objecte de reproducció en la literalitat dels seus termes:

«I. CONSULTA

El Ayuntamiento de Moixent dentro del contrato de servicios suscrito solicita informe sobre los siguientes extremos:

En el Municipio de Moixent se ha desarrollado un Programa de Actuación Integrada que afecta a los Sectores 7A y 7B de su Plan General. El Agente Urbanizador presentó el 9 de diciembre de 2009 con registro de entrada núm. 3491, escrito en el Ayuntamiento, por el que solicitó la Retasación las Cargas de Urbanización que afecta a dichos Sectores pidiendo que se le reconozca el pago de 291.527,15 € más IVA en concepto de cargas de urbanización. Mediante resolución del Sr. Alcalde con núm. 306, de 13 de julio 2011 se acordó estimar parcialmente dicha solicitud al reconocerle el pago de 216.817,10 € más IVA. Esta solicitud de diciembre de 2009 es una reiteración de la solicitud anteriormente realizada el 2 de febrero de 2007. Los propietarios afectados han recurrido en reposición dicha resolución de la Alcaldía. Efectuado el traslado de los mencionados recursos a este letrado se observa que un buen número de recurrentes han solicitado la suspensión de la ejecutividad del Decreto del Sr. Alcalde con núm. 306, de 13 julio de 2011; es por ello, que se impone contestar a esta primera cuestión antes que entrar en el fondo del recurso.

Se tiene a bien emitir al respecto el siguiente,

II. INFORME

De la documentación examinada resulta conveniente efectuar el traslado de los recursos de reposición interpuestos al Agente Urbanizador, *«para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, alegue cuanto estimen procedente»*, a tenor de lo dispuesto en el artículo 112.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por otra parte, con respecto a la suspensión en la ejecutividad del acto administrativo recurrido cabe referir que el artículo 111 del mismo cuerpo legal dice literalmente que:

«1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien compete resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá

suspender de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado, cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto. En estos casos no será de aplicación lo establecido en el artículo 42.4, segundo párrafo de esta Ley.

4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.»

El precepto referido reconoce que el órgano a quien compete resolver el recurso podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros por dicha suspensión. Por otra parte, el precepto reconoce que cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquella sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, y que al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros.

Resulta que el impago de la cuota reconocida en la resolución impugnada genera un perjuicio –reparable- en el Agente Urbanizador, pero también es cierto que la mercantil que ostenta la condición de Agente Urbanizador no tiene otra actividad mercantil que la propia urbanización de los sectores 7A y 7B del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Moixent; -según manifestación realizada a este letrado desde el Ayuntamiento- de manera que, de ser ejecutado el acuerdo mediante el

pago de la nueva cuota de urbanización por los propietarios, lo más probable es que se produzca la disolución de la mercantil que ostentaba la condición de Agente Urbanizador al desaparecer la causa que originó su creación. Este hecho, por sí sólo podría producir un perjuicio irreparable a los propietarios, en el supuesto de obtener una resolución estimatoria de su recurso de reposición –o, posteriormente en su caso, de un ulterior recurso en vía contencioso-administrativa- al resultar de difícil o imposible la recuperación de las cantidades satisfechas. Son dos los intereses de signo contrario que se encuentran en juego. La solicitud de garantías a las dos partes del conflicto sólo puede generar unos costes que resulta conveniente evitar siendo más adecuada la mera suspensión del acuerdo hasta la resolución del recurso.

Por esta razón, resulta conveniente acordar la suspensión del acto administrativo recurrido sin caución o garantía, y solamente por el tiempo que resulte imprescindible para proceder a la resolución de los recursos presentados, por cuanto el impago por este tiempo imprescindible genera un mínimo perjuicio en el Agente Urbanizador, pero el pago de la nueva cuota de urbanización –por retasación de cargas- puede generar un perjuicio irreparable en los propietarios de obtener éstos una resolución favorable a sus pretensiones, por cuanto la mercantil que ostenta la condición de Agente Urbanizador podría haberse disuelto al desaparecer la razón a la que sirve, haciendo estéril una posible reclamación de devolución de la cuota pagada por los propietarios.

Por cuanto se ha expuesto, se formula la siguiente **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN** al Alcalde:

PRIMERO. Dar traslado al Agente Urbanizador de los recursos de reposición interpuestos, para que en un plazo no superior a quince días pueda comparecer en la Secretaría del Ayuntamiento, examinar el expediente, y alegar cuanto estime procedente, a su derecho a tenor de lo dispuesto en el artículo 112.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SEGUNDO. Acordar la suspensión de la resolución del Sr. Alcalde con núm. 306, de 13 de julio de 2011 sin caución o garantía para ninguna de las partes afectadas, por el tiempo imprescindible que resulte necesario hasta que se proceda a la resolución de los recursos interpuestos.

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los interesados y proceder a su publicación en los periódicos oficiales, en que aquél se insertó.

Es cuanto tengo a bien informar en Valencia para Moixent a 26 de septiembre de 2011.

Fdo. Luis Ignacio Serra Mallol

Col. 7.530»

Intervé el regidor socialista Josep Lluís de la Piedad per a referir-se a l'informe de l'advocat, manifestant que es refereix a la necessitat de donar trasllat dels recursos de reposició interposats a l'agent

urbanitzador, en tant que, afegeix, es tracta d'un tràmit obligatori, així com a la suspensió del Decret de l'alcalde núm. 306, de 13 de juliol de 2011, pel que es va aprovar la liquidació definitiva del Sector 7-A i per tant, conclou, també al pagament de les quotes urbanístiques.

Continua el regidor Josep Lluís de la Piedad per a manifestar que l'informe fa referència a l'article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, afegint que des que es va aprovar el sotmetiment a informació pública de la liquidació definitiva ha transcorregut més de 6 mesos, per a estimar o, en el seu cas, desestimar les al·legacions que es van presentar i que com a conseqüència, en aplicació de l'esmentat article 62, el Decret de l'alcalde núm. 306, de 13 de juliol de 2011, es nul de ple Dret.

Continua el regidor Josep Lluís de la Piedad per a preguntar per què no s'ha donat trasllat dels recursos interposats pels propietaris de solars a l'agent urbanitzador.

Intervé l'alcalde per a dir que donada les inquietuds manifestades pels veïns de Moixent i amb la finalitat de obtindre una segona opinió, s'ha considerat convenient contractar els serveis d'un advocat especialitzat.

Intervé el secretari de l'Ajuntament per a dir que el procediment a respectat la legalitat, i que per altra banda no n'hi ha causa de nul·litat, en tot cas, afegeix, de anul·labilitat, es a dir irregularitat no invalidant.

De nou intervé el regidor socialista Josep Lluís de la Piedad per a sol·licitar que es demanen informes al Consell Jurídic Consultiu i als Serveis Jurídics de la Diputació de València.

Intervé el secretari de l'Ajuntament per a dir que en aquest procediment l'informe del Consell Jurídic Consultiu no té caràcter preceptiu, i que en tot cas els recursos de reposicions s'han interposats front a un Decret i que per això la competència per a la seua resolució correspon a l'alcalde.

De nou intervé el regidor socialista Josep Lluís de la Piedad per a dir que el procediment seguit no es correcte i que fins ara tot s'havia fet mitjançant acord plenari, per la qual cosa, conclou, discrepa de la legalitat del procediment i del Decret de l'Alcaldia 306, de 13 de juliol de 2011.

Intervé l'alcalde per a dir que si el sotmetiment i aprovació de la liquidació definitiva s'ha fet mitjançant Decret es per què es possible i que en tot moment s'ha actuat de manera transparent, i conclou per a dir que es deuria modificar la proposta de l'informe de l'advocat afegint que la suspensió del Decret i del pagament ho serà fins a l'emissió dels informes corresponents, es a dir els informes del Consell Jurídic Consultiu i dels Serveis Jurídics de la Diputació de València, sense oblidar l'informe de l'advocat contractat.

De nou intervé el regidor socialista per a dir que no ha dit que el Decret de l'Alcaldia 306, de 13 de juliol de 2011, siga il·legal però sí que s'ha privat al Ple del debat i de la decisió respecte d'un assumpte de tanta importància. Per altra banda, conclou, per manifestar la falta de previsió que suposa que el 13 de juliol s'aprova la liquidació, que el 27 del mateix mes s'aprova inicialment el pressupost i que l'1 d'agost s'aprova una modificació de crèdits per a poder fer front al pagament de la quota, en tant que el pressupost d'aquest any, aprovat inicialment el 27 de juliol, no contempla aquesta obligació de contingut econòmic.

L'Ajuntament en Ple per **UNANIMITAT dels presents**, amb l'abstenció dels regidors socialistes Josep Lluís de la Piedad i María José Molla, en tant que interessats, aprova els següents acords:

Primer. Traslladar l'agent urbanitzador dels recursos de reposició interposats, perquè en un termini no superior a quinze dies pugua comparéixer en la Secretaria de l'Ajuntament, examinar l'expedient, i al·legar quant estime procedent al seu dret, segons el que disposa l'article 112.1 i 2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Segon. Acordar la suspensió de la Resolució de l'Alcaldia núm.: 306, de 13 de juliol del 2011, sense caució o garantia per a cap de les parts afectades, pel temps imprescindible que resulte necessari fins que es procedisca a la resolució dels recursos interposats, sol·licitant informes del Consell Jurídic Consultiu i dels Servicis Jurídics de la Diputació de València, sense perjudi de l'informe sol·licitat a l'advocat D. Luis Ignacio Serra Mallol, col·legiat núm.: 7530 de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València.

Tercer. Notificar el present acord als interessats i publicar en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».

I no havent més assumptes per tractar es va cloure la sessió per la Presidència, essent l'hora de les 20:00 del que jo, com a secretari, dono fe.

Moixent, 26 de setembre de 2011

El secretari,

Signat, Eduardo Estellés Chapa